



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-018-2015-01570-01 (O2-22-002)
Demandante: ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO
Excluyente: CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS
Demandada: AFP OLD MUTUAL S.A.
Garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Procedencia: JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.040 DEL 28 DE JUNIO DE 2022
Asunto: INCIDENTE DE NULIDAD

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-018-2015-01570-01 (O2-22-002), instaurado por **ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO**, como demandante principal, y **CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS**, como interviniente excluyente, en contra de la **AFP OLD MUTUAL S.A.**, la cual llamó en garantía a la aseguradora **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**, en punto a resolver el Recurso de Apelación propuesto por ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, contra el auto que resolvió el incidente de nulidad propuesto, proferido el 02 de diciembre de 2021 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

La señora ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la AFP OLD MUTUAL S.A., en procura de que se declare le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia que se habría causado con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, señor SAUL HORACIO ECHAVARRIA, y al pago de las mesadas ordinarias y adicionales causadas desde el 01 de septiembre de 2014, junto con los intereses de mora, o en subsidio, la indexación.

La demanda se admitió el 20 de abril de 2016 (págs.68-69, doc.01), y se notificó a la AFP OLD MUTUAL S.A., el 16 de mayo de 2016 (pág.86, doc.01), misma que presentó contestación (págs.87-96, doc.01) y llamó en garantía a la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. (págs.110-112, doc.01) el 31 de mayo de 2016, llamamiento que se admitió el 13 de enero de 2017 (págs.124-125, doc.01), se notificó el 03 de abril de 2017 (pág.294, doc.01), y se contestó el 24 de abril de 2017 (págs.329-353, doc.01).

Adicionalmente, se advierte que el 19 de enero de 2017 (págs.136-138, doc.01) la señora CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS, presentó demanda de intervención excluyente, con el propósito de obtener la devolución de los aportes efectuados al Sistema General de Pensiones por su hijo, el afiliado SAUL HORACIO ECHAVARRÍA, junto con los intereses de mora, o en subsidio la indexación; demanda que se admitió el 26 de enero de 2017 (pág.199-200, doc.01), y fue contestada el 08 de febrero de 2017 por la demandante principal (págs.201-207, doc.01), y el 09 de febrero de 2017 por la entidad demandada (págs.209-216, doc.01).

1.1. Trámite de Primera Instancia

La audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, prevista en el artículo 77 del CPTSS, fue programada por auto del 09 de junio de 2017 (pág.401, doc.01); sin embargo, se evidencia que en la audiencia celebrada el 13 de febrero de 2018 (pág.406, doc.01; doc.04), y precedida por la Dra. ADRIANA AROLINA DIQUE HERNÁNDEZ, en su otrora condición de Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, solo se surtieron las etapas de conciliación y de excepciones previas, con ocasión del recurso de apelación impetrado por MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.; y que el 14 de febrero de 2020 (págs.460-461, doc.01; doc.06), en la audiencia precedida por la Dra. ISABEL CRISTINA TORRES MARÍN, en su entonces condición de Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, se evacuaron las etapas de saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas.

La audiencia de trámite y juzgamiento, se fijó para el 09 de octubre de 2020 (págs.460-461, doc.01; doc.06), diligencia que, con ocasión de las contingencias que trajo consigo la Pandemia Covid-19, fue reprogramada el 09 de noviembre de 2020 (doc.02), y que finalmente se instaló el 16 de junio de 2021 (docs.07-08-09-10-11-12), audiencia precedida por la Dra. ISABEL CRISTINA TORRES MARÍN, en ese entonces en su condición de Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, oportunidad en la que se practicaron los interrogatorios de parte de las demandantes, y se recibieron las declaraciones de los testigos solicitados por las mismas,

pero en la que, agotada la jornada ordinaria de trabajo, se fijó fecha y hora para continuar con la práctica la prueba, y emitir la respectiva sentencia.

La continuación de la audiencia de trámite y juzgamiento fue prevista para llevarse a cabo el 02 de diciembre de 2021 (docs.19,21-22), y fue precedida por la Dra. ALBA MERY JARAMILLO MEJÍA en su actual condición de Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, diligencia en la que el apoderado de la señora ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO (minuto 06:00, doc.21) propuso un incidente de nulidad, en procura de que se anule todo lo actuado desde el auto en el que se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 80 del CPTSS, y en su lugar, se rehaga nuevamente la audiencia de trámite y juzgamiento, para que la juez que profiera la sentencia, sea la misma que practicó las pruebas, con fundamento en que, aunque la audiencia establecida en el artículo 80 del CPTSS está prevista como un acto procesal indivisible, en el proceso de la referencia la diligencia se fraccionó en dos partes, y en la primera se practicaron algunas pruebas por una funcionaria judicial diferente, vulnerándose con ello el principio de inmediación previsto en los artículos 42 y 45 del CPTSS, y el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la CP.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia en la misma diligencia (minuto 14:25, doc.21; doc.22), por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de declarar impróspero el incidente de nulidad incoado, arguyendo que la causal de nulidad invocada no está prevista en el artículo 133 del CGP, y que la única causal prevista por el cambio de funcionario judicial, se configura cuando la sentencia se profiere por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación, situación que no acontece frente al particular; que el desarrollo de las pruebas practicadas consta en grabación de audio y video, siendo posible que el fallador perciba todas las particularidades del caso; y que el juez debe asumir la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.

1.3. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, el apoderado judicial de ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO (minuto 18:45, doc.21; doc.22), interpuso el recurso de apelación, reiterando los supuestos fácticos y jurídicos que expuso cuando impetró el incidente de nulidad; que en el asunto de la referencia se le vulneraron a su prohiada los derechos a la inmediación y debido

proceso; que las audiencias previstas en el CGP son diferentes a las audiencias consagradas en el CPTSS, que para los asuntos de mayor cuantía solo prevé la realización de dos (2) audiencias, las cuales, no podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más tiempo, y en ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias, además que la interviniente excluyente fue evasiva en algunas preguntas.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 24 de enero de 2022 (doc.02), y mediante proveído del día 31 del mismo mes y año (doc.03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo necesario.

El apoderado judicial de ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, alegó el 08 de febrero de 2022 (doc.04), con la finalidad de que se revoque el auto impugnado, efecto para el cual transcribió el contenido de los artículos 45 y 80 del CPTSS, y con base en ello afirmó que lo pretendido por el legislador era unificar el trámite probatorio y la sentencia, y hacer eficaz el principio de concentración; que la audiencia de trámite fue suspendida por más de un mes, y al momento de dársele continuidad, la misma iba ser precedida por una juez diferente, que no tuvo contacto directo con la prueba recaudada; y que en el proceso laboral, además de las causales previstas en el artículo 133 del CGP, se genera nulidad, entre otras razones, por la falta de inmediación e identidad del juez del trabajo, causal que va de la mano con la nulidad constitucional prevista en el artículo 29 superior, por violación del debido proceso.

La vocera judicial de la AFP OLD MUTUAL S.A. alegó el 10 de febrero de 2022 (doc.05), a efectos de que se confirme la decisión de primer grado, indicando que no existe vulneración alguna al principio constitucional al debido proceso ni al principio de inmediación con ocasión del cambio de juez que se presentó en el despacho; que la pretendida nulidad solo se configura cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación; que la actual titular del despacho puede acceder a la grabación de la práctica de las pruebas y valorar las actitudes de quienes declararon; y que corresponde al juez del proceso valorar la pertinencia y utilidad de las pruebas recaudadas.

Y el procurador judicial de CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS alegó el 14 de febrero de 2022 (doc.06), en punto a que se confirme la decisión de primera instancia, con fundamento en

que la causal de nulidad invocada no está prevista en el artículo 133 del CGP; que solo se configura nulidad cuando a sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación; que la primera parte de la audiencia de trámite y juzgamiento inició a las 9am, y se suspendió solo minutos antes de la 5pm, bajo el argumento de que era físicamente imposible agotar todas las pruebas en esa oportunidad, decisión frente a la que el apoderado recurrente no manifestó ninguna inconformidad, actuación que convalidó cuando actuó con posterioridad sin invocar ninguna causal de nulidad; que existe una plena garantía del respeto por los derechos de las partes, en la medida en que el mismo recurrente admitió que la nueva directora del proceso tiene un amplio conocimiento del mismo; y que el deseo del apelante es revivir una oportunidad procesal, con el ánimo de obtener un mayor aprovechamiento en beneficio de su representada, propósito que raya con la lealtad procesal.

Finalmente, se advierte que el poderhabiente judicial de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. no presentó alegatos de conclusión.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si el cambio de funcionario judicial vulnera el principio de inmediación, y en tal medida, vicia de nulidad la práctica de las pruebas presidida por el juez anterior y, en consecuencia, se debe rehacer lo actuado.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que la causal de nulidad invocada no fue contemplada como tal en el estatuto procesal, porque el principio de inmediación tiene una connotación eminentemente procesal, definida por el tipo de procedimiento adoptado, y no hace parte del núcleo sustantivo del debido proceso, por lo

cual, solo sería posible decretar la nulidad si se hubieren generado graves afectaciones a derechos o principios o garantías procesales de las partes e intervinientes en la actuación, dado que el principio del juez natural está relacionado es con la preexistencia del cargo, y no con la persona que ejerce el cargo, y porque en el asunto de la referencia, sometido a la jurisdicción desde el año 2015, debe prevalecer el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

2.3.1. Las nulidades procesales: La Corte Constitucional ha señalado que "... las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente– les ha atribuido la consecuencia –sanción– de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaratoria se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso" [T-125 de 2010].

Nuestro sistema procesal, tal y como se deduce del artículo 133 del CGP, ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales de nulidad, lo que significa que solo se pueden considerar como vicios que afectan la actuación procesal, aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente por la Constitución, en tanto que cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento a la declaración de infirmación de lo actuado.

La Corte Constitucional, adicionalmente ha estimado que un sistema restringido de nulidades se ajusta a la Constitución, por cuanto garantiza los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal. En este sentido, ha sostenido que "*... pese a que el artículo 29 superior establece los fundamentos básicos del derecho al debido proceso, corresponde al legislador, dentro de su facultad discrecional y con arreglo a los principios constitucionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas las formas procesales que deben ser cumplidas para asegurar su vigencia. En tal virtud, la regulación del régimen de nulidades es un asunto que atañe en principio al legislador, el cual puede señalar, de conformidad con el principio de la proporcionalidad y los demás principios constitucionales, las causales de nulidad [...]. El legislador eligió un sistema de causales taxativas de nulidad con el fin de preservar los principios de seguridad jurídica y celeridad en los procesos judiciales. En efecto, este sistema permite presumir, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se*

declare su nulidad con arreglo a una de las causales específicamente previstas en la ley [...]. De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas" [C-491 de 1995].

Dentro de este escenario legal, vale señalar el contenido del artículo 133 del CGP, así:

"Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

- 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.*
- 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.*
- 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.*
- 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*
- 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.*
- 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o recorrer su traslado.*
- 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.*
- 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.*

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece." (Subrayas de la Sala).

Así las cosas, se evidencia que, tal y como lo advirtió la juez de instancia, y lo alegaron los apoderados judiciales de los demás sujetos procesales que integran la Litis, el cambio del cognoscente de instancia solo constituye causal de nulidad cuando la sentencia se profiere por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión, o la sustentación del recurso de apelación, hipótesis que no corresponde a la acaecida en el proceso de la referencia, puesto que, el cambio de juez ocurrió previo a que se surtiera la etapa de alegaciones de conclusión.

Ahora bien, el artículo 80 del CPTSS establece:

“ARTICULO 80. Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el día y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás. En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá decretar un receso de una (1) hora para proferirla y se notificará en estrados” (Subrayas de la Sala).

A su turno, el artículo 45 del mismo estatuto preceptúa:

“ARTICULO 45. Señalamiento de audiencias. Antes de terminar la audiencia el juez señalará fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deberá ser informada mediante aviso colocado en la cartelera del Juzgado en un lugar visible al día siguiente.

Las audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más tiempo.

En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias” (Subrayas de la Sala).

Sin embargo, se advierte que por auto del 14 de febrero de 2020 (págs.460-461, doc.01; doc.06), dictado al finalizar la audiencia prevista en el artículo 77 del CPTSS, se fijó el 09 de octubre de 2020, a la 9am, para llevar a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento; diligencia que fue reprogramada para el 16 de junio de 2021, a las 9am (doc.02), instalándose a la fecha y hora señaladas (docs.07-08-09-10-11-12), y aunque estaba previsto que en la misma fecha se practicaran las pruebas y se dictara sentencia, lo cierto es que, por la cantidad de interrogatorios, testimonios y ratificaciones, y por algunos problemas de conectividad de las partes, las pruebas no alcanzaron a practicarse en su totalidad dentro de las horas hábiles, debiéndose señalar fecha y hora para darle continuidad a las demás etapas de la audiencia de trámite y juzgamiento.

Y aunque es cierto que la normativa que rige la materia establece que en ningún caso podrán celebrarse más de dos audiencias, esta Corporación considera que dicha restricción no obliga al juez de la causa a extender la jornada ordinaria de trabajo hasta el momento en que se agote el objeto de la diligencia, y en virtud de ello, habilitando la audiencia en tiempo posterior al cierre de la jornada de trabajo para continuar ejerciendo su labor hasta las altas horas de la noche, lo cual entra a reñir con el ejercicio de la función pública en condiciones dignas no solo del funcionario judicial, sino también los derechos fundamentales de las partes.

Pese a ello, y aunque en gracia de discusión se admitiere que la audiencia de trámite y juzgamiento solo puede celebrarse en una sola diligencia, el mismo día, lo cierto es que la

inobservancia de dicha restricción no fue contemplada por el legislador como una causal de nulidad, y en tal sentido, la referida "irregularidad", en caso de ser considerada, debe entenderse subsanada en los términos del párrafo del artículo 133 del CGP, y del numeral 1º del artículo 136 ibídem, habida cuenta que, ninguna de las partes impugnó el auto en el que se dispuso la suspensión de la audiencia, y se fijó nueva fecha y hora para darle continuidad, y que el apoderado judicial recurrente actuó con posterioridad a ello, incluso, solicitando el aplazamiento de la audiencia programada para continuar con las etapas de trámite y juzgamiento (doc.18), sin alegar la presunta nulidad invocada.

2.3.2. El derecho al debido proceso: Ahora bien, con el propósito de abordar todos y cada uno de los aspectos planteados por el apoderado judicial del recurrente, conviene memorar el contenido del artículo 29 de la CP, así:

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

El precepto constitucional en cita consagra el debido proceso como una garantía fundamental de la cual gozan todos los ciudadanos que intervienen en las actuaciones judiciales y administrativas, el cual engloba los siguientes aspectos:

- a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
- b) El derecho al juez natural, que es el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
- c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte,

el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

- d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
- e) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Ello así, colige la Sala que el principio de inmediación, sin restarle la importancia e incidencia que tiene, no fue contemplado por el legislador constituyente como parte intrínseca del núcleo del derecho al debido proceso, por las razones que se exponen a continuación.

2.3.3. El principio de inmediación: El principio de inmediación de la prueba, es definido como aquella posibilidad que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada; sin embargo, no puede pasarse por alto que, por vía jurisprudencial, en aplicación de métodos de ponderación o balanceo, se han ido estableciendo lineamientos que reducen el campo material de acción del principio de inmediación.

A guisa de ejemplo, cabe citar lo resuelto por la Corte Constitucional, en la sentencia T-205 de 2011, que en lo pertinente señala: “... los principios de concentración y de inmediación de la prueba contienen una caracterización trascendental. La inmediación permite al juez percibir de su fuente directa las pruebas y las alegaciones de las partes, mientras la concentración hace posible valorar el acervo probatorio en un lapso temporal que no debe ser prolongado, para que lo interiorizado por el juzgador no se desvanezca con el transcurrir del tiempo, principios éstos que deben ser acatados con rigurosidad. Sin embargo, es claro que estos principios no deben tomarse como absolutos, según lo reiterado en esta providencia, bajo el entendido que la repetición de un juicio oral para nominalmente preservar los principios de inmediación y concentración, debe ser excepcional y estar fundada en motivos muy serios y razonables” (Subraya de la Sala).

Corolario de lo anterior, se advierte que el principio de inmediación tiene una connotación eminentemente procesal, definida por el tipo de procedimiento adoptado, y no hace parte

del núcleo fuerte del debido proceso que en Colombia se instituye constitucionalmente en el artículo 29 de la CP.

Consecuentemente, la Sala estima trascendental, para lo que aquí se decide, destacar cómo la decisión transcrita consagra una especie de *capitis diminutio* al principio de inmediación, al extremo de establecer como tesis principal que, incluso en el juicio penal, cuando el juez no practicó las pruebas, o mejor, no fue practicada en presencia del funcionario encargado de emitir la decisión, solo es posible decretar la nulidad por vía excepcionalísima, si se demuestran graves afectaciones a derechos o principios o garantías procesales insaneables, sin que ello aconteciere en el proceso de la referencia, siendo que, a todas las partes e intervinientes, incluida la recurrente, se les permitió el ejercicio libre de los derechos de contradicción y de defensa.

2.3.4. El principio del juez natural: El concepto de Juez natural como imperativo constitucional se erige en una garantía formal y material en orden a que los ciudadanos en desarrollo del principio de igualdad no puedan llegar a ser sometidos a persecuciones por parte del Estado por razones políticas, raciales, ideológicas o de cualquier otra índole. Por juez natural se entiende al funcionario judicial preexistente a la ocurrencia de los hechos, instituido por la Constitución o la ley, con competencias singularmente establecidas, quien a su vez deberá pronunciarse de manera imparcial, es decir, sin sometimiento, ni dependencia ideológica, discursiva, ni conceptual de ningún otro órgano o funcionario de la rama ejecutiva, legislativa, incluidos sus inmediatos superiores.

Nada sobre este particular, permite afirmar que el concepto en cuestión pueda extenderse para amparar los casos en los cuales ese funcionario primeramente cognoscente con plena competencia es remplazado por otro con las mismas cualidades; es que, si ese fuese el entendimiento o alcance del principio estudiado, apenas natural se impondría decretar la nulidad en todos los casos de cambio de juez durante el juicio, siendo conveniente memorar que el asunto por el que se procede ha tenido tres (3) cambios de juez, única y exclusivamente por aspectos referidos a las vicisitudes de la carrera administrativa en la movilidad de personal atinente a los funcionarios de la Rama Judicial.

Ello así, se educa que con el cambio de juez del que se duele el apoderado judicial recurrente, no se está vulnerando el principio del juez natural, entretanto, la funcionaria designada para ocupar el cargo de Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, acredita las mismas condiciones de preexistencia, capacitación y experiencia que exige el cargo.

2.3.5. El principio de acceso a la administración de justicia: Finalmente, se destaca que el artículo 229 de la CP, estatuye el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en los siguientes términos:

“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.”

Respecto a los alcances de esta norma, desarrollando el concepto de acceso material a la administración de justicia, la Corte Constitucional advirtió: *“La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la resolución de un proceso, la obtenga oportunamente [...]. Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”* [C-543- de 2011].

En estos términos, la Corte Constitucional construyó una línea indisoluble entre el principio de acceso material a la justicia y el de celeridad, para señalar que *“... la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos [...]. En otras palabras, es parte integrante del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”* [C-543- de 2011].

Es más, la Corte Constitucional extendió la previsión de los efectos del derecho de acceso a una justicia pronta, al punto de erigirlo como una finalidad constitucional, al indicar que: *“El derecho de acceso a la justicia (CP, art 229) ha sido cualificado como derecho a una justicia pronta. La propia Constitución, en relación con las actuaciones judiciales, alude a un debido proceso público sin dilaciones injustificada (CP, 29); y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia consagra los principios de celeridad y eficiencia (L.270/96, art 4 y 7), según los cuales la administración de justicia debe ser pronta y cumplida como eficiente o diligente en la sustanciación de los asuntos a su cargo, respectivamente. La oportunidad de la función pública de administración de justicia, se concreta en el cumplimiento perentorio y estricto de los términos procesales por los funcionarios judiciales (CP, 228; L 270/96, art 7)”* [C-334 de 2012].

Y tratándose de un asunto que fue radicado desde el 05 de noviembre de 2015 (pag.08, doc.01), debe dársele mayor relevancia al derecho de acceso a la administración de justicia, no solo en beneficio de la demandante, sino también a favor de la interviniente excluyente,

la entidad demandada, y la aseguradora llamada en garantía, quienes llevan casi 7 años esperando una respuesta pronta del sistema de administración de justicia. *A fortiori*, si trayendo los predicamentos de la Corte Constitucional en la sentencia C-583 de 2016, en la en que en sede de la acción pública de inconstitucionalidad, y al examinar la exequibilidad de los artículos 5 y 12 (parcial) de la Ley 1149 de 2007, por presuntamente vulnerar los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia y al debido proceso, señaló frente a la oralidad en el código procesal del trabajo y seguridad social que: “No vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso el limitar el tiempo concedido para desarrollar la audiencia del proceso laboral y el poder de suspenderla o posponerla”.

Corolario de todo lo anterior, la Sala considera que el derecho al debido proceso del extremo activo de la relación procesal no se ha visto afectado, y en glosa de ello, se impartirá confirmación al auto impugnado.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, las costas de la segunda instancia estarán a cargo de ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho la suma de \$500.000, que corresponde a medio (1/2) SMMLV, cifra que se distribuirá equitativamente a favor de los demás sujetos procesales, esto es, \$166.666 a favor de CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS, \$166.666 a favor de la AFP OLD MUTUAL S.A., y \$166.666 a favor de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**,

4. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto que resolvió el incidente de nulidad propuesto por la parte actora, proferido el 02 de diciembre de 2021, por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, como demandante principal, y CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS, como interviniente excluyente, contra la AFP OLD MUTUAL S.A., la que llamó en garantía a la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ PATIÑO, fijándose como agencias en derecho la suma de \$ 500.000, que corresponde a medio (1/2) SMMLV, de los cuales, \$166.666 serán a favor de CELINA DE JESÚS YEPES ARIAS, \$166.666 serán a favor de la AFP OLD MUTUAL S.A., y \$166.666 serán a favor de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en la forma prevista en el artículo 41, literal c) del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

(sin firma por ausencia justificada)
JULIO RAFAEL TRODECILLA PAYARES
Magistrado


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No.112, fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **29 de junio de 2021** a las 08:00am,
los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario